

El Gobierno exige investigar los centros de menores

Cabrera insta a la Fiscalía a que indague en su funcionamiento

PEDRO SIMON

Madrid

Algunos críos son «maniatados» de dos en dos «por las muñecas» y otros sufren «desnudos integrales». Muchos son metidos en celdas de «aislamiento sin ventanas» y es habitual la «administración forzosa de fármacos» cuando hay que abatir a la fiera.

El Gobierno se desayunó ayer con el estómago revuelto por sus vergüenzas menores, y a la hora del almuerzo ya tiraba del bicarbonato del adulto. Lo anunció al mediodía la ministra de Educación, Política Social y Deporte, Mercedes Cabrera, quien hizo público que pedirá a la Fiscalía General del Estado que investigue los presuntos maltratos que se cometen en los centros de protección de menores.

La señal roja de la alarma la encendió el lunes Enrique Múgica, defensor del Pueblo, quien en su Informe sobre los centros de protección de menores con trastornos de conducta y en situación de dificultad social destapaba una olla podrida que ha estado cociendo durante años.

«Estos hechos tienen que ser investigados y eso le corresponde a la Fiscalía. Por lo tanto, voy a pedirle que efectivamente lo haga», señaló Mercedes Cabrera. «Confiamos, evidentemente, en que las comunidades autónomas [que tienen las competencias en la materia] atiendan y respondan a este informe del Defensor del Pueblo», comentó, agregando que su Ministerio «no puede quedarse al margen» de este asunto.

Aunque organizaciones como la Coordinadora de Barrios llevan años denunciando las prácticas de estos centros y las consecuencias nefastas de su privatización (de los 58 que hay en España, 55 son concesiones privadas), no fue hasta ayer cuando desde distintos ámbitos se removieron los asientos.

Según informa Efe, la Consejería de Bienestar Social de la Comunidad Valenciana ordenó la apertura de un expediente para investigar en los centros de menores Baix Maestrat de Vinaroz (Castellón) y L'Omet de Elche (Alicante) las irregularidades denunciadas en el informe. Así lo aseguró el conseller de Bienestar Social, Juan Cotino.

Por su parte, el Partido Popular pidió la comparecencia en el Congreso del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, para que dé cuenta de lo que sabía del funcionamiento de estos centros y de las «dramáticas circunstancias» que se han producido en algunos, en expresión de su portavoz parlamentaria, Soraya Sáenz de Santamaría.

Desde las filas socialistas se pronunció Marisol López, secretaria de Bienestar Social del PSOE. «Ante la gravedad de los hechos denunciados», señaló que es necesaria la intervención de las instituciones competentes en la materia, especialmente de las comunidades autónomas, recalcó, «para que solventen y pongan fin a esta situación».

La emblemática Unicef, a la que siempre vemos mirando allende las fronteras, giró la cabeza puertas adentro. Habla Paloma Escudero, su directora en España: «Lo que hay que hacer es investigar muy bien los hechos. Cualquier menor ha de tener protegidos todos sus derechos viva donde viva, tanto si está en su entorno familiar como si está protegido por un centro».

«Todo el día empastillados»

>Angel, un menor que ha estado 10 años en el centro Picón de Jarama (Madrid), señala que «ningún chaval se merece» estar allí. «Muchos niños sufren malos tratos. Están totalmente empastillados. Quietos todo el día y sin moverse».

>Emilio Pinto, presidente de la fundación internacional O'Belen, que gestiona el centro anterior, aseguró ayer que en sus dependencias «ni se ata ni se maltrata a ninguno de los jóvenes». Es más: «Nunca se ha dado una colleja».